

I. DOSSIER: RELACIONES IGLESIA-ESTADO

PRESENTACIÓN

La cuestión de la *relación Iglesia-Estado* presenta una complejidad considerable y, en sus diversas facetas, puede devenir objeto de consideración desde variadas perspectivas, en atención a la secuencia histórica de su evolución, o en virtud de aproximaciones de corte sociológico atentas a descifrar un pluralismo cultural y cultural creciente y, en todo caso, en perspectiva jurídica.

Como es notorio, la regulación de estas relaciones en la medida en que, no obstante la centralidad de un común jurídico constitucional del que la libertad religiosa y la cláusula antidiscriminatoria son particular exponente, guarda un diverso grado de congruencia con una específica tradición histórica y se inserta en un determinado contexto social, lógicamente se traduce en una diferenciada articulación, conforme a modelos y según variantes, en atención a su grado de incidencia en el estatuto y proyección pública de Iglesias y confesiones.

En este sentido, es inequívoca la existencia de una relación de correspondencia entre el régimen eclesiástico y el derecho de libertad religiosa. En el presente boletín, en la medida en que se exponen los elementos principales de algunos de los modelos de régimen eclesiástico más significativos en el espacio europeo, se brinda al lector una oportunidad de ahondar en el conocimiento contrastado de sistemas diversos, el británico de Iglesia de Estado, particularmente problemático en su variante inglesa, el de separatismo laico a la francesa y una tercera modalidad caracterizada por un aconfesionalismo compatible con la cooperación con las Iglesias respecto del que no pocas singularidades se ofrecen, en sus diversas variantes española e italiana o germana.

En un contexto de globalización creciente y sociedades abiertas, resulta de un particular interés el estudio atento y en detalle de unos regímenes eclesiásticos que, sobre una dimensión colectiva de los derechos de libertad religiosa, en su caso, delimitada en contraste con una concepción más abierta de la libertad de creencias –lo que, por lo que al orden constitucional español se refiere, tiene un fundamento suficiente en la expresa yuxtaposición de las libertades ideológica y religiosa y de culto, en el artículo 16 CE– que, como derecho fundamental, es en lo sustancial una materia concerniente al derecho constitucional, se traducen en una variable regulación a propósito de las confesiones, en cuanto tales y en su proyección pública.

Y ello en un sentido amplio que abarca desde lo relativo a los diversos aspectos conexos a su (relativo) grado de autonomía organizativa, pasando por la tipificación penal de conductas lesivas de los sentimientos religiosos, contradictorias con el ejercicio de las libertades en un contexto de pluralismo religioso, hasta la adopción de disposiciones y medidas al efecto de su efectivo ejercicio, tales como el establecimiento de modalidades de financiación, mediante ayudas directas o en virtud de medidas de exención fiscal, la previsión de acceso a instituciones públicas, hospitalarias, militares o penitenciarias, la previsión de inserción de la religión como materia educativa en el sistema público de enseñanza, etc... Y respecto de todas estas cuestiones encontrará el lector interesado información actualizada en relación con las modalidades y variantes de regímenes eclesiásticos ya mencionados.

En su singular complejidad, el caso británico puede considerarse expresivo del modelo de Iglesias de Estado; en particular, en atención a la integración de la Iglesia anglicana en la estructura política del Reino. Nota particularmente destacable, en este punto, puede considerarse la modulación que el tinte confesionalista propio del régimen eclesiástico del Reino Unido, en lo sustancial, de los regímenes eclesiásticos nacionales, inglés y, en menor medida, escocés, ha experimentado como consecuencia, sobre todo, de la controvertida apertura ordinal a los estándares convencionales de libertad religiosa que resulta de la incorporación del CEDH mediante la *Human Rights Act*. Sin perjuicio del indubitado ámbito de discrecionalidad que a los Estados se reserva a propósito de la concreta articulación de los respectivos regímenes eclesiásticos, acaso no haya otra forma de compatibilizar con los mínimos comunes europeos de igualdad y libertad religiosa las funciones religiosas correspondientes a la titular de la Corona británica, en tanto que cabeza de la Iglesia anglicana, que su formalización y reconducción, a la escocesa, a una dimensión de carácter meramente simbólico.

De otra parte, y aun con los matices precisos en atención a la concurrencia de especialidades regionales, de cooperativa concertación con los cultos reconocidos, o ultramarinas, de trato preferente a un determinado culto a la *guyanesa*, puede afirmarse la condición modélica de un régimen de laicidad a la francesa que, no obstante su evolución, al menos, por lo que al régimen común se refiere, mantiene una línea de separación de Iglesias y Estado que, sobre la base de una concepción modulada de la proyección del principio de laicidad en un marco de igualdad en la aplicación de la ley común, vendría a desglosarse en una triple faceta de neutralidad estatal, libertad religiosa y respeto del pluralismo.

Expresivos de una genérica modalidad de concertación se han de considerar los regímenes de cooperación eclesiástica que, en congruencia con su tradición eclesiástica y con un diverso grado de diferenciación, en atención, entre otros extremos, a una articulación competencial consecuente con estructuras políticamente descentralizadas, se han desarrollado en las Repúblicas de Alemania e Italia y, sobre la base de una explícita previsión constitucional, *ex* artículo 16.3 CE, en el Reino de España.

Pues bien, si Alemania se caracteriza por una densa geografía religiosa, no obstante la recepción de la vieja normativa *weimariana* en su Ley fundamental, como bien se advierte con una simple consulta de las actuales previsiones constitucionales de los *Länder*, Italia destaca, dicho sea sin perjuicio de su declarada laicidad republicana, por una práctica de compatibilización de la especial posición de la Iglesia católica con respecto a las otras Iglesias y confesiones concertadas, lo que, en buena medida, recuerda el caso español.

Del régimen eclesiástico español acaso convenga destacar, sobre otros aspectos, la trascendencia de una tradicional ligazón a las vicisitudes de la Iglesia católica, al margen podrían no entenderse del todo ciertos episodios pasados y recientes. Una tradicional ligazón que se acredita, ya en el período tardofranquista, con la corrección del estricto confesionalismo concordatario, mediante un (cauteloso) régimen de tolerancia religiosa, si bien congruente con la novedosa doctrina establecida a

propósito de la libertad religiosa en el Concilio vaticano II, apenas reconducible al estricto régimen confesional del Concordato de 1953 entonces vigente, y en pleno proceso de transición a la democracia, en el tracto de una renegociación del estatuto jurídico y efectiva presencia de la Iglesia católica en la España constitucional entonces en ciernes, mediante negociación de unos Acuerdos con la Santa Sede, formalmente sucritos *post Constitutionem*. Que esta pretendida prefiguración eclesiástica del consenso expreso en el artículo 16 CE y, en su gradualismo sociológico, aun potenciada en su desarrollo mediante LO 7/1980, de libertad religiosa (LOLR), está en el origen de las renuencias por parte de la jerarquía eclesiástica al efecto de extraer todas las consecuencias derivadas de un régimen eclesiástico, aunque cooperativo, no confesional, parece una afirmación difícil de rebatir.

Y, en efecto, aun si, conforme al régimen de concertación legalmente previsto, se ha avanzado en el reconocimiento de entidades religiosas y en la relativa equiparación del régimen eclesiástico respecto de otras confesiones arraigadas (judaísmo, islamismo y cristianismo evangélico), bien puede decirse que esa tradicional ligazón con la Iglesia católica del régimen eclesiástico en España tiende a trascender el cambio de régimen político. Y episodios tales como los relativos a la concertación de su sistema de financiación y, más recientemente, a propósito de la congruencia constitucional (y concordataria) del régimen las asignaturas de religión (en particular, en lo atinente al régimen de propuesta y retirada de la idoneidad del profesorado) y de una novedosa enseñanza para la ciudadanía que, mediante invocación de argumentos, no siempre comprensibles y, en todo caso, cuestionados en el seno de la representación del profesorado, en los que la jerarquía eclesiástica insiste con denuedo.

Finalmente, antes de concluir estas referencias introductorias, se impone una llamada de atención acerca del contexto

jurídico europeo en el que este abanico de regímenes eclesiásticos lógicamente se enmarca y que, siendo como es un complemento necesario, sólo por razones de espacio no se inserta en el presente boletín. En este sentido, un lector interesado no debiera desatender los términos del debate que, en el fallido proceso deliberativo de constitucionalización de la Unión Europea ha dejado aportaciones conspicuas, como la panfletaria defensa *weilleriana* de una expresa invocación del cristianismo que fuera de Polonia no ha tenido mucho recorrido. Y ello sin perjuicio de que finalmente, si se confirma la proyectada reforma de los Tratados en vigor, en el ámbito jurídico de la Unión Europea, en consonancia con los estándares del CEDH, se mantenga la salvaguarda de un ámbito estatal de discrecional articulación de regímenes eclesiásticos, hasta el límite de su compatibilidad con los elementos de igualdad y libertad religiosa que, en sus diversas proyecciones, integran eso que, con base en la propia jurisprudencia del TEDH, se ha podido caracterizar como el orden público europeo de los derechos fundamentales.

Sistematizada, y así contextualizada, la documentación compilada en este boletín, junto con las referencias adicionales que pueden consultarse en la página *web* del CEPC, interesa sin duda a un público amplio que, sobre el círculo de los eclesiasticistas y constitucionalistas, alcanza a estudiantes universitarios y jóvenes investigadores. Y en esa medida, el CEPC al tiempo que cumple una tarea fundamental de servicio público, avanza en su empeño de devenir un centro de referencia, no ya sólo en España e Iberoamérica, sino en una Europa, en la que no faltan los centros de excelencia investigadora.

ANTONIO LÓPEZ CASTILLO
Profesor Titular de Derecho constitucional
Universidad Autónoma de Madrid

SUMARIO

I. EUROPA	4
I.1. Documentos básicos sobre el estatuto de las iglesias y la libertad religiosa	4
I.1.1. Unión Europea	4
I.1.2. Consejo de Europa	12
I.1.3. Jurisprudencia de la Cour Européenne des Droits de l'homme	14
I.2. Bibliografía	18
I.3. Direcciones web	19
II. ALEMANIA	20
II.1. Ley Fundamental de Bonn de 1949	20
II.2. Legislación Federal	21
a) Concordato entre la Santa Sede y el Reich alemán	21
b) Otros Acuerdos Federales	26
II.3. Constituciones de los Estados Federados	36
II.4. Legislación vigente de los Estados Federados	52
1. Baden-Württemberg	52
2. Baja Sajonia	55
3. Baviera	60
4. Berlín	66
5. Brandeburgo	68
6. Bremen	68
7. Hamburgo	68
8. Hesse	68
9. Mecklemburgo-Pomerania Occidental	74
10. Renania del Norte-Westfalia	77
11. Renania Palatinado	79
12. El Sarre	81
13. Sajonia	81
14. Sajonia-Anhalt	86
15. Schleswig-Holstein	92
16. Turingia	92
II.5. Modos de financiación de las comunidades religiosas	99
II.5.1. Legislación de los Estados federados en relación al impuesto religioso	99
II.5.2. Estadísticas de las iglesias	105
II.6. Jurisprudencia	110
II.7. Bibliografía	112
II.8. Direcciones web	112
III. ESPAÑA	114
III.1. Constitución Española de 1978	114
III.1.1. Ley Orgánica 7/1980 de Libertad religiosa	115
III.2. Instrumentos de Ratificación de España al acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, hecho en la Ciudad del Vaticano en 28 de julio de 1976	116
III.3. Debates parlamentarios de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, sobre Asuntos Económicos, sobre Asuntos Jurídicos y sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de Clérigos y Religiosos	117
III.4. Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos	154
III.4.1. Legislación de desarrollo	155
III.4.2. Jurisprudencia	157
III.4.3. Estadísticas	162
III.5. Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Culturales	164
III.5.1. Legislación de desarrollo	166
III.5.2. Jurisprudencia	171
III.5.3. Estadísticas	211
III.6. Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos	217
III.6.1. Legislación de desarrollo	219
III.6.2. Jurisprudencia	221
III.6.3. Estadísticas	222
III.7. Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio militar de clérigos y religiosos	228
III.7.1. Legislación de desarrollo	230
III.7.2. Jurisprudencia	231
III.8. Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre Asuntos de Interés Común en Tierra Santa y Anejo, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994	232
III.9. Acuerdos de Cooperación del Estado con otras confesiones religiosas	234
III.9.1. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España	234
III.9.2. La Federación de Comunidades Israelitas de España	240
III.9.3. La Comisión Islámica de España	244
III.9.4. Otras confesiones	249
III.10. Legislación de las Comunidades Autónomas	251
III.11. Iniciativas legislativas y actos de control en las Cortes Generales	263
III.12. Bibliografía	286
III.13. Direcciones web	295

IV. FRANCIA: CIEN AÑOS DE LAICISMO	297
IV.1. Declaración de los Derechos del hombre de 1789	300
IV.1.1. Preámbulo de la Constitución de 1946 y Constitución de 1958	301
IV.2. Origen del estado laico	302
IV.3. Ley de Separación de las Iglesias y el Estado y legislación posterior	319
IV.4. Códigos	352
IV.5. Disposiciones relativas a la organización del culto en Alsace-Moselle	356
IV.6. Jurisprudencia	361
IV.7. Selección de textos de informes sobre las relaciones Iglesia-Estado	363
IV.7.1. Otros informes de interés	369
IV.8. Bibliografía	370
IV.9. Direcciones web	372
V. ITALIA	373
V.1. Disposiciones fundamentales relativas a las relaciones Iglesia-Estado	373
V.2. Legislación	375
V.2.1. El Estado y la Iglesia Católica	375
V.2.1.1. Los Pactos de Letrán (1929) y normas hasta 1984	375
V.2.1.2. Los Acuerdos de Villa Madama y normas de desarrollo	387
V.2.2. El Estado y las Confesiones religiosas no católicas	405
V.2.3. Legislación regional	416
V.3. Jurisprudencia	431
V.4. Documentos	435
V.5. Bibliografía	441
V.6. Direcciones web	442
VI. REINO UNIDO	443
VI.1. Inglaterra	443
VI.1.1. Legislación	443
VI.2. Gales	472
VI.2.1. Legislación	472
VI.3. Escocia	489
VI.3.1. Legislación	489
VI.4. Irlanda del Norte	495
VI.4.1. Legislación	495
VI.5. Estadísticas	497
VI.6. Documentos	502
VI.7. Bibliografía	504
VI.8. Direcciones web	505

I. EUROPA

I.1. DOCUMENTOS BÁSICOS SOBRE EL ESTATUTO DE LAS IGLESIAS Y LA LIBERTAD RELIGIOSA

I.1.1. UNION EUROPEA

1. TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

Diario Oficial n° C 191 de 29 de julio de 1992

Diario Oficial n° C 340 de 10/11/1997

(Versión consolidada)

Artículo 6

2. La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario.

Artículo 13

Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

2. TRATADO DE LA COMUNIDAD EUROPEA

(versión consolidada)

(Tratado de Roma de 25.03.1957. Versión consolidada integrando las modificaciones aportadas por el Tratado de Amsterdam de 02.10.1997)

Diario Oficial n° C 340 de 10 de noviembre de 1997

Artículo 13 (antiguo artículo 6 A)

Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

3. DECLARACIÓN RELATIVA AL ESTATUTO DE LAS IGLESIAS Y DE LAS ORGANIZACIONES NO CONFESIONALES de 2 de octubre de 1997

Declaración n° 11 Anexo al Acta Final del Tratado de Ámsterdam

Diario Oficial n° C 340 de 10 de noviembre de 1997

1. La Unión Europea respeta y no prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros.

2. La Unión Europea respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales.

3. La Unión mantendrá un diálogo regular con dichas iglesias y organizaciones, en reconocimiento de su identidad y de su contribución específica.

4. DECLARACIÓN DE GRECIA RELATIVA A LA DECLARACIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LAS IGLESIAS Y LAS ORGANIZACIONES NO CONFESIONALES de 2 de octubre de 1997

Declaración n° 8 anexo al Acta final del Tratado de Ámsterdam

Diario Oficial n° C340 de 10 de noviembre de 1997

Por lo que se refiere a la Declaración sobre el estatuto de las iglesias y las organizaciones no confesionales, Grecia recuerda la Declaración común sobre el Monte Athos aneja al Acta final del Tratado de Adhesión de Grecia a las Comunidades Europeas

5. CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNION EUROPEA de 2 de diciembre de 2000

Diario Oficial n° C 364 de 18 de diciembre de 2000

PREÁMBULO

Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes.

Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación.

(...)

CAPÍTULO II

LIBERTADES

Artículo 10. *Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión*

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

2. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

Artículo 14. *Derecho a la educación*

1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.

2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.

3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

CAPÍTULO III

IGUALDAD

Artículo 21. *No discriminación*

1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Tratados.

Artículo 22. *Diversidad cultural, religiosa y lingüística*

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

6. CARTA COMUNITARIA DE LOS DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES

Documento COM de 9 de diciembre de 1989

PREÁMBULO

(...)

Considerando que, para garantizar la igualdad de trato, es conveniente luchar contra las discriminaciones en todas sus formas, en particular las basadas en el sexo, el color, la raza, las opiniones y las creencias, y que, con espíritu de solidaridad, es importante luchar contra la exclusión social.

7. TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA

Diario Oficial n° C 310 de 16 de diciembre de 2004

PREÁMBULO

INSPIRÁNDOSE en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho,

PARTE I

TÍTULO II

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓNArtículo 1-9. *Derechos fundamentales*

1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales que constituye la Parte 11.

2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en la Constitución.

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros forman parte del Derecho de la Unión como principios generales.

Artículo 1-52. *Estatuto de las iglesias y de las organizaciones no confesionales*

1. La Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros, en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas.

2. La Unión respetará asimismo el estatuto reconocido, en virtud del Derecho interno, a las organizaciones filosóficas y no confesionales.

3. Reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones.

PARTE II

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN

PREÁMBULO

Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes.

Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación.

La Unión contribuye a defender y fomentar estos valores comunes dentro del respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos a escala nacional, regional y local; trata de fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible y garantiza la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, así como la libertad de establecimiento.

TÍTULO II

LIBERTADESArtículo 11-70. *Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión*

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-

to, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

2. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

Artículo 11-74. *Derecho a la educación*

1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. 2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.

3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

TÍTULO III

IGUALDADArtículo II-81. *No discriminación*

1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de la Constitución y sin perjuicio de sus disposiciones particulares.

Artículo II-82. *Diversidad cultural, religiosa y lingüística*

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

PARTE III

DE LAS POLÍTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN

TÍTULO I

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL

Artículo III-118

En la definición y ejecución de las políticas y acciones contempladas en la presente Parte, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Artículo III-121

Cuando definan y ejecuten la política de la Unión en los ámbitos de la agricultura, la pesca, los transportes, el mercado interior, la investigación y el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias del bienestar de los animales como seres sensibles, al tiempo que respetarán las disposiciones legales o administrativas y los usos de los Estados miembros, en particular por lo que respecta a los ritos religiosos, las tradiciones culturales y los patrimonios regionales.

TÍTULO II**NO DISCRIMINACIÓN Y CIUDADANÍA****Artículo III-124**

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de la Constitución y dentro de las competencias que ésta atribuye a la Unión, una ley o ley marco europea del Consejo podrá establecer las medidas necesarias para luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la ley o ley marco europea podrá establecer los principios básicos de las medidas de fomento de la Unión y definir dichas medidas para apoyar las acciones emprendidas por los Estados miembros con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos enunciados en el apartado 1, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de éstos.

**8. REGLAMENTO (CE) Nº 2116/2004 DEL
CONSEJO DE 2 DE DICIEMBRE DE 2004 POR EL
QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) NO
2201/2003 RELATIVO A LA COMPETENCIA,
EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE
RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA
MATRIMONIAL Y DE RESPONSABILIDAD
PARENTAL, POR EL QUE SE DEROGA EL
REGLAMENTO (CE) Nº 1347/2000,
EN LO QUE RESPECTA A LOS TRATADOS
CON LA SANTA SEDE**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista el Acta de adhesión de la República Checa, de Estonia, de Chipre, de Letonia, de Lituania, de Hungría, de Malta, de Polonia, de Eslovenia y de Eslovaquia, y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando lo siguiente:

(1) El artículo 40 del Reglamento (CE) no 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes (1), establece que las resoluciones relativas a la nulidad de un matrimonio regulado por los Tratados entre la Santa Sede y Portugal, Italia y España (Concordatos) se han de reconocer en los Estados miembros en las condiciones previstas en el capítulo III de dicho Reglamento.

(2) El artículo 40 del Reglamento (CE) no 1347/2000 fue modificado por el anexo II del Acta de adhesión de 2003 para que se mencione el Acuerdo entre la Santa Sede y Malta sobre el reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios canónicos y las resoluciones de las autoridades y tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de 3 de febrero de 1993, junto con el segundo Protocolo adicional, de 6 de enero de 1995.

(3) El Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 (2), entró en vigor el 1 de agosto de 2004 y se aplicará a partir del 1 de marzo de 2005 en todos los Estados miembros, excepto Dinamarca.

(4) Malta ha pedido que el artículo 63 del Reglamento (CE)

no 2201/2003, que corresponde al artículo 40 del Reglamento (CE) no 1347/2000, se modifique para que se mencione su Acuerdo con la Santa Sede.

(5) El artículo 57 del Acta de adhesión de 2003 establece que los actos adoptados antes de la adhesión que requieran una adaptación como consecuencia de ésta podrán adaptarse con arreglo a un procedimiento simplificado en el que el Consejo decide por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión.

(6) Está justificado tener en cuenta la petición de Malta y modificar en consecuencia el Reglamento (CE) no 2201/2003.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El artículo 63 del Reglamento (CE) no 2201/2003 queda modificado como sigue:

1) en el apartado 3 se añade el texto siguiente: «c) Acuerdo entre la Santa Sede y Malta sobre el reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios canónicos y las resoluciones de las autoridades y tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de 3 de febrero de 1993, incluido el Protocolo de aplicación de la misma fecha, junto con el segundo Protocolo adicional, de 6 de enero de 1995»;

2) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: «4. El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá someterse en Italia, en España o en Malta a los mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se refiere el apartado 3».

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de marzo de 2005.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los

Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Bruselas, el 2 de diciembre de 2004.

Por el Consejo El Presidente

J. P. H. DONNER

**9. REGLAMENTO (CE) Nº 2201/2003 DEL
CONSEJO, DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2003,
RELATIVO A LA COMPETENCIA,
EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN
DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA
MATRIMONIAL Y DE RESPONSABILIDAD
PARENTAL, POR EL QUE SE DEROGA EL
REGLAMENTO (CE) Nº 1347/2000**

Diario Oficial nº L 338 de 23/12/2003 p. 0001 – 0029

Artículo 63. Tratados con la Santa Sede

1. El presente Reglamento será aplicable sin perjuicio del Tratado internacional (Concordato) celebrado entre la Santa Sede y Portugal, firmado en el Vaticano el 7 de mayo de 1940.

2. Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulada por el Tratado indicado en el apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las condiciones previstas en la sección 1 del capítulo III.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los siguientes Tratados (Concordatos) con la Santa Sede:

a) «Concordato lateranense» de 11 de febrero de 1929 entre Italia y la Santa Sede, modificado por el Acuerdo, y su Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero de 1984;

b) Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y España sobre asuntos jurídicos.

4. El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá someterse en Italia o en España a los mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se refiere el apartado 3.

5. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión:

a) copia de los Tratados a los que se refieren los apartados 1 y 3;

b) toda denuncia o modificación de dichos Tratados.

10. REGLAMENTO (CE) Nº 1347/2000 DEL CONSEJO DE 29 DE MAYO DE 2000 RELATIVO A LA COMPETENCIA, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA MATRIMONIAL Y DE RESPONSABILIDAD PARENTAL SOBRE LOS HIJOS

Diario Oficial L 160 de 30 de junio de 2000

(9) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe incluir los procedimientos civiles, así como los procedimientos no judiciales admitidos en materia matrimonial en determinados Estados, con exclusión de los procedimientos de naturaleza puramente religiosa. Por lo tanto, debe precisarse que el término «órgano jurisdiccional» incluye a las autoridades, judiciales o no, competentes en materia matrimonial.

(...)

(20) España, Italia y Portugal habían celebrado Concordatos antes de la inclusión de esta materia en el Tratado. Conviene evitar que estos Estados miembros incumplan sus obligaciones internacionales con la Santa Sede.

(...)

Artículo 40. Tratados con la Santa Sede

1. El presente Reglamento será aplicable sin perjuicio del Tratado internacional (Concordato) celebrado entre la Santa Sede y Portugal, firmado en el Vaticano el 7 de mayo de 1940.

2. Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulado por el Tratado indicado en el apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las condiciones sobre el reconocimiento de resoluciones relativas a la previstas en el capítulo III.

3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los siguientes Tratados (Concordatos) con la Santa Sede:

a) Concordato lateranense, de 11 de febrero de 1929, entre Italia y la Santa Sede, modificado por el Acuerdo, con Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero 1984;

b) Acuerdo entre la Santa Sede y España sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979.

4. El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá someterse en Italia o en España a los mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se refiere el apartado 3.

5. Los Estados miembros afectados transmitirán a la Comisión:

a) copia de los Tratados a que se refieren los apartados 1 y 3;

b) toda denuncia o modificación de dichos Tratados.

11. ACTOS ADOPTADOS EN APLICACIÓN DEL TÍTULO VI DEL TRATADO UE

Decisión del Consejo de 19 de abril de 2007 por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico «Derechos fundamentales y ciudadanía», integrado en el programa general «Derechos fundamentales y justicia»

Diario Oficial de la Unión Europea L 110/33 de 27.4.2007

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 308, Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a todos los Estados miembros.

(2) En la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, teniendo presente su estatuto jurídico y su ámbito de aplicación, y en las explicaciones que la acompañan, se reflejan los derechos que se derivan, en particular, de las tradiciones constitucionales y de las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, el Tratado de la Unión Europea, los Tratados comunitarios, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(3) En noviembre de 2004, el Consejo Europeo reconoció la importancia de la comunicación para acercar a todos los ciudadanos al proyecto europeo fomentando una ciudadanía activa.

(4) En su Comunicación de 15 de octubre de 2003 al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, la Comisión destacaba la importancia del papel que la sociedad civil desempeña tanto en la protección como en la promoción de los derechos fundamentales; la Comisión debería, por consiguiente, mantener un diálogo abierto, transparente y periódico con la sociedad civil.

(5) Según el Programa de La Haya, el refuerzo de la cooperación requiere un esfuerzo explícito para mejorar la comprensión mutua entre los órganos judiciales y los diferentes ordenamientos jurídicos. Las redes europeas de autoridades jurídicas nacionales deberían ser objeto de especial atención y respaldo a este respecto.

(6) La Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos y la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea contribuyen, mediante el mantenimiento de bases de datos pertinentes, al cambio de impresiones y de experiencias sobre cuestiones relativas a la jurisprudencia, la organización y el funcionamiento de sus miembros en el ejercicio de sus funciones judiciales y consultivas en relación con el Derecho comunitario. Debería ser posible cofinanciar las actividades de esta conferencia y de esta asociación en cuanto a los gastos contraídos en pro de un objetivo de interés europeo general. Sin embargo, tal cofinanciación no debería suponer que estas redes queden incluidas en un futuro programa, ni tampoco debería obstaculizar que otras redes europeas disfruten de apoyo para sus actividades de conformidad con la presente Decisión.

(7) Es conveniente subrayar la importancia de las acciones de información y comunicación sobre los derechos que la ciudadanía de la Unión confiere a sus ciudadanos para que estos conozcan mejor sus derechos y gocen de un fácil acceso a una información fiable.

(8) El fomento del diálogo interconfesional y multicultural en la Unión Europea contribuiría a preservar y fortalecer la paz y los derechos fundamentales.

(9) Los objetivos del programa deben ser complementarios de los de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales creada por el Reglamento (CE) n° 168/2007 del Consejo y deben centrarse en aquellos ámbitos en que puede aportarse un valor añadido europeo. Para ello, debe llevarse a cabo una coordinación adecuada.

(10) Con vistas a conseguir la complementariedad y el mejor uso posible de los recursos, debe evitarse todo solapamiento entre las actividades respaldadas por el programa y las de las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de los derechos fundamentales, como el Consejo de Europa, posibilitando a la vez las actividades conjuntas tendentes a alcanzar los objetivos del programa. Para ello debe llevarse a cabo una coordinación adecuada.

(11) De acuerdo con el principio de permitir que los países candidatos y los países de los Balcanes Occidentales participen en los programas comunitarios, consagrado en el Programa de Salónica, se debe permitir su participación, así como la de los países adherentes, en el programa. Esta participación debe estar condicionada al cumplimiento de las condiciones generales del acuerdo bilateral y a la contribución al presupuesto del programa. Cuando contribuya al logro de los objetivos de que se trate, también debe ser posible asociar a las autoridades, órganos y organizaciones no gubernamentales de los países que no participen en el programa a acciones específicas, en calidad de socios, sin ser por ello los beneficiarios principales del proyecto.

(12) Es importante adoptar también las medidas oportunas para prevenir las irregularidades y el fraude y tomar las medidas necesarias para recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) n° 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

(13) El Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas denominado en lo sucesivo «el Reglamento financiero», y el Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deben aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios, la limitación del número de casos en que la Comisión tiene la responsabilidad directa de su aplicación y gestión, y la necesaria proporcionalidad entre la magnitud de los recursos y los costes administrativos vinculados a su utilización.

(14) El Reglamento financiero exige que se adopte un acto de base para la ejecución de subvenciones de funcionamiento.

(15) De conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (7), deben adoptarse las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión, distinguiendo entre las medidas que han de adoptarse por el procedimiento de gestión y las que han de adoptarse por el procedimiento consultivo, ya que en algunos casos un comité consultivo puede resultar más adecuado con vistas a una mayor eficacia.

(16) Los objetivos del programa, en particular el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, la protección de los derechos fundamentales y de los derechos del ciudadano, a

través de un diálogo interconfesional y multicultural, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos del programa, pueden lograrse mejor a nivel comunitario. La Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(17) El Tratado no contempla, para la adopción de la presente Decisión, poderes de acción distintos de los establecidos en su artículo 308.

(18) A fin de garantizar la ejecución efectiva y oportuna del programa, la presente Decisión debe aplicarse desde el 1 de enero de 2007.

(19) El Comité Económico y Social Europeo ha emitido un dictamen.

DECIDE:

Artículo 1. *Establecimiento del programa*

1. En virtud de la presente Decisión se establece el programa específico «Derechos fundamentales y ciudadanía» (en lo sucesivo denominado «el programa»), integrado en el programa general «Derechos fundamentales y justicia».

2. El programa abarcará el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.

3. El programa se ejecutará en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario.

Artículo 2. *Objetivos generales*

1. El programa persigue los objetivos generales siguientes:

a) promover el desarrollo de una sociedad europea basada en el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, incluidos los derechos que emanan de la ciudadanía de la Unión;

b) reforzar la sociedad civil y fomentar un diálogo abierto, transparente y periódico con ella sobre los derechos fundamentales;

c) combatir el racismo, la xenofobia y el antisemitismo y fomentar una mejor comprensión interconfesional e intercultural y una mayor tolerancia a través de toda la Comunidad Europea;

d) mejorar los contactos, el intercambio de información y las relaciones entre las autoridades jurídicas, judiciales y administrativas y los profesionales del Derecho, a través del apoyo a la formación judicial, con vistas a una mejor comprensión mutua entre dichas autoridades y profesionales, entre otros medios.

2. Los objetivos generales del programa son complementarios de los perseguidos por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea creada mediante el Reglamento (CE) n° 168/2007.

3. Los objetivos generales del programa contribuirán al desarrollo y la ejecución de políticas comunitarias dentro del pleno respeto de los derechos fundamentales.

Artículo 3. *Objetivos específicos*

El programa tendrá los siguientes objetivos específicos:

a) promover los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea e informar a todos los ciudadanos sobre sus derechos, incluidos los que emanan de la ciudadanía de la Unión, con el fin de alentar a los ciudadanos de la Unión a participar activamente en la vida democrática de la Unión;

b) examinar, cuando sea necesario, el respeto de derechos fundamentales concretos en la Unión Europea y sus Estados miembros al aplicar la legislación comunitaria, y recabar dic-

támenes sobre cuestiones específicas vinculadas a los derechos fundamentales dentro de dichos límites;

c) apoyar a las organizaciones no gubernamentales y demás agentes de la sociedad civil con el fin de aumentar su capacidad para participar activamente en la promoción de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia;

d) crear las estructuras pertinentes para promover el diálogo interconfesional y multicultural a escala de la Unión Europea.

Artículo 4. *Acciones*

Con objeto de perseguir los objetivos generales y específicos enunciados en los artículos 2 y 3, el programa apoyará los siguientes tipos de acciones:

a) acciones específicas realizadas por la Comisión, tales como estudios e investigación, sondeos y encuestas de opiniones, formulación de indicadores y metodologías comunes, recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de páginas web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales, y actividades de análisis, seguimiento y evaluación;

b) proyectos transnacionales específicos de interés comunitario presentados por una autoridad u organismo de un Estado miembro o una organización internacional o no gubernamental, en los que participen al menos dos Estados miembros o al menos un Estado miembro y otro Estado, ya sea un país adherente o un país candidato, en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales;

c) acciones de financiación de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que persigan objetivos de interés general europeo relacionados con los objetivos generales del programa en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales;

d) subvenciones de funcionamiento destinadas a cofinanciar los gastos relacionados con el programa de trabajo permanente de la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos y de la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos administrativos de la Unión Europea, la cual mantiene bases de datos que ofrecen un repertorio de sentencias de ámbito europeo relativas a la aplicación del Derecho comunitario, en la medida en que dichos gastos se contraen en pro de un objetivo de interés europeo general, a través del fomento de cambios de impresiones y experiencias sobre cuestiones relacionadas con la jurisprudencia, la organización y el funcionamiento de sus miembros en el ejercicio de sus funciones judiciales o consultivas en relación con el Derecho comunitario.

Artículo 5. *Participación de terceros países*

1. Las acciones del programa estarán abiertas a los siguientes países, denominados en lo sucesivo «países participantes»: países adherentes, países candidatos y países de los Balcanes Occidentales que participan en el proceso de estabilización y asociación en las condiciones previstas en los acuerdos de asociación o sus protocolos adicionales relativos a la participación en programas comunitarios ya celebrados o por celebrar con estos países.

2. A las acciones referidas en el artículo 4 podrán asociarse las autoridades, los órganos o las organizaciones no gubernamentales de países que no participan en el programa con arreglo al apartado 1, cuando ello pueda contribuir a preparar la adhesión de los países a que se refiere el apartado 1 o a contribuir al logro de los objetivos de las acciones de que se trate.

Artículo 6. *Grupos destinatarios*

El programa se dirige a los ciudadanos de la Unión Europea, a los ciudadanos de los países participantes o a los nacio-

nales de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión Europea, a las organizaciones de la sociedad civil y a otros grupos que desarrollan actividades de promoción de los objetivos del programa.

Artículo 7. *Acceso al programa*

1. El programa estará abierto a la participación de, entre otros, organizaciones e instituciones públicas o privadas, universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, autoridades nacionales, regionales y locales, organizaciones internacionales y otras organizaciones sin ánimo de lucro establecidas en la Unión Europea o en uno de los países participantes, con arreglo al artículo 5.

2. El programa permitirá el desarrollo de actividades conjuntas realizadas con organizaciones internacionales competentes en el ámbito de los derechos fundamentales, tales como el Consejo de Europa, sobre la base de contribuciones comunes y de acuerdo con las distintas disposiciones vigentes en cada institución u organización, a efectos de la consecución de los objetivos del programa.

Artículo 8. *Tipos de intervención*

1. La financiación comunitaria podrá adoptar las siguientes formas jurídicas:

- a) subvenciones;
- b) contratos públicos.

2. Las subvenciones comunitarias se adjudicarán sobre la base de una convocatoria de propuestas, excepto en casos excepcionales y debidamente justificados, establecidos en el Reglamento financiero, y se concederán en forma de subvenciones de funcionamiento y subvenciones de la acción. El porcentaje máximo de cofinanciación se especificará en los programas de trabajo anuales.

3. Por otro lado, están previstos gastos para medidas de acompañamiento a través de licitaciones, en cuyo caso los fondos comunitarios se destinarán a la compra de bienes y servicios. Esto abarcará, entre otras cosas, los gastos en medidas de información y comunicación, y la preparación, aplicación, seguimiento, comprobación y evaluación de proyectos, políticas, programas y legislación.

Artículo 9. *Normas de aplicación*

1. La Comisión pondrá en práctica la asistencia comunitaria de acuerdo con el Reglamento financiero.

2. A efectos de la ejecución del programa, la Comisión adoptará, dentro de los límites que establecen los objetivos generales enunciados en el artículo 2, un programa de trabajo anual en el que precisará sus objetivos específicos y sus prioridades temáticas y ofrecerá una descripción de las medidas de acompañamiento previstas en el artículo 8, así como, en su caso, una lista de otras acciones.

3. El programa de trabajo anual se establecerá con arreglo al procedimiento definido en el artículo 10, apartado 3.

4. Los procedimientos de evaluación y de adjudicación de subvenciones para acciones tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) conformidad con el programa de trabajo anual, los objetivos generales fijados en el artículo 2 y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4;
- b) la calidad de la acción propuesta en cuanto a su concepción, organización, presentación y resultados previstos;
- c) importe de la financiación comunitaria solicitada y adecuación de dicho importe a los resultados previstos;
- d) incidencia de los resultados previstos en los objetivos generales definidos en el artículo 2, así como en las medidas adoptadas en los distintos ámbitos según se especifican en los artículos 3 y 4.

5. Las solicitudes de subvenciones de funcionamiento contempladas en el artículo 4, letras b) y c), se evaluarán a la luz de los siguientes criterios:

- a) su coherencia con los objetivos del programa;
- b) la calidad de las actividades previstas;
- c) el probable efecto multiplicador de tales actividades en los ciudadanos;
- d) el impacto geográfico de las actividades previstas;
- e) la implicación de los ciudadanos en la organización de los organismos en cuestión;
- f) la relación coste-beneficio de la acción propuesta.

6. Las decisiones referentes a las acciones que se presenten al amparo del artículo 4, letras b) y c), serán adoptadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 10, apartado 2.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento financiero, el principio de reducción gradual no se aplicará a la subvención de funcionamiento otorgada a la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos y a la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea, en la medida en que persigan un objetivo de interés general europeo.

Artículo 10. *Comité*

1. La Comisión estará asistida por un Comité (denominado en lo sucesivo «el Comité»).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE. El plazo contemplado en el artículo 4, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

4. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 11. *Complementariedad*

1. Se buscarán sinergias y complementariedades con otros instrumentos comunitarios, en particular con los programas generales «Seguridad y defensa de las libertades» y «Solidaridad y gestión de los flujos migratorios» y con el programa «Progress». Se garantizará la complementariedad con la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La información estadística sobre los derechos fundamentales y la ciudadanía se elaborará en colaboración con los Estados miembros a partir de los datos disponibles, recurriendo, según proceda, al Programa Estadístico Comunitario.

2. El programa podrá compartir recursos con otros instrumentos comunitarios, en particular con los programas generales «Seguridad y defensa de las libertades» y «Solidaridad y gestión de los flujos migratorios», con el fin de ejecutar acciones que respondan a los objetivos de todos los programas.

3. Las operaciones financiadas al amparo de la presente Decisión no recibirán la ayuda para el mismo propósito de otros instrumentos financieros comunitarios. Se velará por que los beneficiarios de la presente Decisión proporcionen a la Comisión información sobre cualquier financiación recibida con cargo al presupuesto comunitario o procedente de otras fuentes, así como sobre las solicitudes de financiación en curso.

Artículo 12. *Recursos presupuestarios*

Los recursos presupuestarios destinados a las acciones previstas en el programa se consignarán como créditos anuales en el presupuesto general de la Unión Europea. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales disponibles dentro de los límites del marco financiero.

Artículo 13. *Seguimiento*

1. La Comisión velará por que para cualquier acción finan-

ciada por el programa, el beneficiario presente informes técnicos y financieros sobre el avance de las actividades. Tres meses después de concluida la acción, deberá presentarse, además, un informe final. La Comisión determinará la forma y el contenido de los informes.

2. La Comisión velará por que los contratos y acuerdos resultantes de la ejecución del programa prevean, en particular, la supervisión y el control financiero por parte de la Comisión (o de sus representantes autorizados), en caso necesario mediante controles *in situ*, incluso por muestreo, y la fiscalización por el Tribunal de Cuentas.

3. La Comisión velará por que el beneficiario de la ayuda financiera conserve a disposición de la Comisión todos los justificantes de los gastos relacionados con la acción durante un período de cinco años a contar desde el último pago correspondiente a dicha acción.

4. Sobre la base de los resultados de los informes y controles *in situ* a que hacen referencia los apartados 1 y 2, la Comisión velará por que, en caso necesario, se adapten la cuantía o las condiciones de adjudicación de la ayuda financiera aprobada inicialmente, así como el calendario de los pagos.

5. La Comisión velará por que se tomen todas las demás medidas necesarias para verificar si las acciones financiadas se llevan a la práctica adecuadamente y de conformidad con lo dispuesto en la presente Decisión y en el Reglamento financiero.

Artículo 14. *Protección de los intereses financieros de la Comunidad*

1. La Comisión se asegurará de que, en la ejecución de las acciones financiadas con arreglo a la presente Decisión, los intereses financieros de la Comunidad queden protegidos merced a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, la realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente y, en caso de que se detectaran irregularidades, mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, de acuerdo con los Reglamentos (CE, Euratom) n° 2988/95, (Euratom, CE) n° 2185/96 y (CE) n° 1073/1999.

2. Por lo que se refiere a las acciones comunitarias financiadas en el marco del programa, los Reglamentos (CE, Euratom) n° 2988/95 y (Euratom, CE) n° 2185/96 se aplicarán a toda violación de las disposiciones del Derecho comunitario, incluidos los incumplimientos de una obligación contractual expresamente estipulada sobre la base del programa y resultante de un acto u omisión por parte de un agente económico que, a través de un gasto injustificado, tenga o pueda tener por efecto causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión Europea o a presupuestos gestionados por ellas.

3. La Comisión velará por que el importe de la ayuda financiera concedida a una acción se reduzca, suspenda o recupere en caso de descubrir irregularidades, incluida la inobservancia de las disposiciones de la presente Decisión, la decisión concreta o el contrato o el convenio por el que se concede la ayuda financiera en cuestión, o cuando tenga constancia de que, sin haber solicitado la autorización de la Comisión, se han introducido en la acción modificaciones incompatibles con la naturaleza o las condiciones de ejecución del proyecto.

4. En caso de incumplimiento de los plazos, o cuando el estado de realización de una acción solo permita justificar una parte de la ayuda financiera concedida, la Comisión velará por que el beneficiario presente sus observaciones dentro de un plazo determinado. Si el beneficiario no aporta una justificación válida, la Comisión velará por que se cancele el resto de la ayuda financiera y exigirá el reembolso de las sumas ya pagadas.

5. La Comisión velará por que una suma indebidamente pagada le sea reembolsada. Las sumas no reembolsadas pun-

tualmente según las condiciones establecidas por el Reglamento financiero devengarán intereses.

Artículo 15. *Evaluación*

1. El programa será objeto de seguimiento periódico con el fin de comprobar la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del mismo.

2. La Comisión garantizará una evaluación periódica, externa e independiente del programa.

3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:

- a) un informe anual sobre la ejecución del programa;
- b) un informe intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del programa, que refleje la labor realizada por los beneficiarios de subvenciones de funcionamiento previstas en el artículo 4, letra d), a más tardar el 31 de marzo de 2011;

c) una comunicación sobre la prosecución del programa, a más tardar el 30 de agosto de 2012;

d) un informe de evaluación *a posteriori*, a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Artículo 16. *Publicidad de las acciones*

La Comisión publicará cada año una lista de las acciones financiadas con cargo al programa, junto con una breve descripción de cada proyecto.

Artículo 17. *Entrada en vigor*

La presente Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

Hecho en Luxemburgo, el 19 de abril de 2007.

Por el Consejo

La Presidenta

B. ZYPRIES

I.1.2. DOCUMENTOS DEL CONSEJO DE EUROPA

1. CARTA SOCIAL EUROPEA

de 18 de octubre de 1961. Consejo de Europa
(Estrasburgo).

PREÁMBULO

(...)

Considerando que el goce de los derechos sociales debe quedar garantizado sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia nacional u origen social;

2. CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

De 4 de noviembre de 1950

Revisado de conformidad con el Protocolo nº 11
completado por los Protocolos nº 1 y 6
(STE nº 005)(11.05/1994)

Artículo 9. *Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión*

1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

2 La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.

Artículo 14. *Prohibición de discriminación*

El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.

3. PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

Protocolo nº 1

París, 20 de marzo de 1952. Instrumento de Ratificación de
2 de noviembre de 1990

Art. 2. *Derecho a la instrucción*

A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.

4. RACCOMANDAZIONE DEL 4 OTTOBRE 2005, N. 1720 «EDUCATION AND RELIGION»

1. The Parliamentary Assembly forcefully reaffirms that each person's religion, including the option of having no religion, is a strictly personal matter. However, this is not inconsistent with the view that a good general knowledge of religions and the resulting sense of tolerance are essential to the exercise of democratic citizenship.

2. In its Recommendation 1396 (1999) on religion and democracy, the Assembly asserted: "There is a religious aspect to many of the problems that contemporary society faces, such as intolerant fundamentalist movements and terrorist acts, racism and xenophobia, and ethnic conflicts."

3. The family has a paramount role in the upbringing of children, including in the choice of a religious upbringing. However, knowledge of religions is dying out in many families. More and more young people lack the necessary bearings fully to apprehend the societies in which they live and others with which they are confronted.

4. The media – printed and audiovisual – can have a highly positive informative role. Some, however, especially among those aimed at the wider public, very often display a regrettable ignorance of religions, as shown for instance by the frequent unwarranted parallels drawn between Islam and certain fundamentalist and radical movements.

5. Politics and religion should be kept apart. However,

democracy and religion should not be incompatible. In fact they should be valid partners in efforts for the common good. By tackling societal problems, the public authorities can eliminate many of the situations which can lead to religious extremism.

6. Education is essential for combating ignorance, stereotypes and misunderstanding of religions.

Governments should also do more to guarantee freedom of conscience and of religious expression, to foster education on religions, to encourage dialogue with and between religions and to promote the cultural and social expression of religions.

7. School is a major component of education, of forming a critical spirit in future citizens and therefore of intercultural dialogue. It lays the foundations for tolerant behaviour, founded on respect for the dignity of each human being. By teaching children the history and philosophy of the main religions with restraint and objectivity and with respect for the values of the European Convention on Human Rights, it will effectively combat fanaticism. Understanding the history of political conflicts in the name of religion is essential.

8. Knowledge of religions is an integral part of knowledge of the history of mankind and civilisations. It is altogether distinct from belief in a specific religion and its observance. Even countries where one religion predominates should teach about the origins of all religions rather than favour a single one or encourage proselytising.

9. In Europe, there are various concurrent situations. Education systems generally – and especially the state schools in so-called secular countries – are not devoting enough resources to teaching about religions, or – particularly in countries where there is a state religion and in denominational schools – are focusing on only one religion. Some countries have prohibited the carrying or wearing of religious symbols in schools. These provisions have been judged as complying with the European Convention on Human Rights.

10. Unfortunately, all over Europe there is a shortage of teachers qualified to give comparative instruction in the different religions, so a European teacher training institute for that needs to be set up (at least for teacher trainers), which could benefit from the experience of a number of institutes and faculties in the different member countries that have long been researching and teaching the subject of comparative religion.

11. The Council of Europe assigns a key role to education in the construction of a democratic society, but study of religions in schools has not yet received special attention.

12. The Assembly observes moreover that the three monotheistic religions of the Book have common origins (Abraham) and share many values with other religions, and that the values upheld by the Council of Europe stem from these values.

13. Accordingly, the Assembly recommends that the Committee of Ministers:

13.1. examine the possible approaches to teaching about religions at primary and secondary levels, for example through basic modules which would subsequently be adapted to the various educational systems;

13.2. promote initial and in-service teacher training in religious studies respecting the principles set out in the previous paragraphs;

13.3. envisage setting up a European teacher training institute for the comparative study of religions.

14. The Assembly also recommends that the Committee of Ministers encourage the governments of member states to ensure that religious studies are taught at the primary and secondary levels of state education, on the basis of the following criteria in particular:

14.1. the aim of this education should be to make pupils discover the religions practised in their Own and neighbouring countries, to make them perceive that everyone has the same right to believe that their religion is the “true faith” and that

other people are not different human beings through having a different religion or not having a religion at all;

14.2. it should include, with complete impartiality, the history of the main religions, as well as the option of having no religion;

14.3. it should provide young people with educational tools that enable them to be quite secure in approaching supporters of a fanatical religious practice;

14.4. it must not overstep the borderline between the realms of culture and worship, even where a country with a state religion is concerned. It is not a matter of instilling a faith but of making young people understand why religions are sources of faith for millions;

14.5. teachers on religions need to have specific training. They should be teachers of a cultural or literary discipline. However, specialists in another discipline could be made responsible for this education;

14.6. the state authorities should look after teacher training and lay down the syllabuses which should be adapted to each country’s peculiarities and to the pupils’ ages. In devising these programmes, the Council of Europe will consult all partners concerned, including representatives of the religious faiths.

5. FREEDOM OF EXPRESSION AND RESPECT FOR RELIGIOUS BELIEFS

Resolution 28 June 2006 N. 15101

1. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe reaffirms that there cannot be a democratic society without the fundamental right to freedom of expression. The progress of society and the development of every individual depend on the possibility of receiving and imparting information and ideas. This freedom is not only applicable to expressions that are favourably received or regarded as inoffensive but also to those that may shock, offend or disturb the state or any sector of population, in accordance with Article 10 of the European Convention on Human Rights.

2. Freedom of thought, conscience and religion constitutes a necessary requirement for a democratic society and one of the essential freedoms of individuals for determining their perception of human life and society. Conscience and religion are a basic component of human culture. In this sense, they are protected under Article 9 of the European Convention on Human Rights.

3. Freedom of thought and freedom of expression in a democratic society must, however, permit open debate on matters relating to religion and beliefs. The Assembly recalls in this regard its Recommendation 1396 (1999) on religion and democracy. Modern democratic societies are made up of individuals of different creeds and beliefs. Attacks on individuals on grounds of their religion or race cannot be permitted but blasphemy laws should not be used to curtail freedom of expression and thought.

4. The Assembly emphasises the cultural and religious diversity of its member states.

Christians, Muslims, Jews and members of many other religions are at home in Europe as well as those without any religion. Religions have contributed to the spiritual and moral values, ideals and principles which form the common heritage of Europe. In this respect, the Assembly stresses Article 1 of the Statute of the Council of Europe which stipulates that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage.

5. The Assembly underlines its commitment to ensuring that cultural diversity becomes a source of mutual enrichment, not

of tension, through a true and open dialogue among cultures on the basis of mutual understanding and respect. The overall aim should be to preserve diversity in open and inclusive societies based on human rights, democracy and the rule of law, by fostering communication and improving the skills and knowledge necessary for living together peacefully and constructively within European societies, between European countries and between Europe and neighbouring regions.

6. Reactions to images perceived as negative, transmitted through books, films, cartoons, paintings and the Internet, have recently caused widespread debates about whether – and to what extent – respect for religious beliefs should limit freedom of expression. Questions have also been raised on the issues of media responsibility, self-regulation and self-censorship.

7. Blasphemy has a long history. The Assembly recalls that laws punishing blasphemy and criticism of religious practices and dogmas have often had a negative impact on scientific and social progress. The situation started changing with the enlightenment and progressed further 1 Assembly debate on 28 June 2006 (19th Sitting) (see Doc.10970, report of the Committee on Culture, Science and Education, rapporteur: Mrs Sinikka Hurkainen). Text adopted by the Assembly on 28 June 2006 (19th Sitting).

Towards secularisation. Modern democratic societies tend to be secular and more concerned with individual freedoms. The recent debate about the Danish cartoons raised the question of these two perceptions.

8. In a democratic society, religious communities are allowed to defend themselves against criticism or ridicule in accordance with human rights legislation and norms. States should support information and education about religion so as to develop better awareness of religions as well as a critical mind in its citizens in accordance with Assembly Recommendation 1720 (2005) on education and religion. States should also develop and vigorously implement sound strategies including adequate legislative and judicial measures to combat religious discrimination and intolerance.

9. The Assembly also recalls that the culture of critical dispute and artistic freedom has a long tradition in Europe and is considered as positive and even necessary for individual and social progress. Only totalitarian systems of power fear them. Critical dispute, satire, humour and artistic expression should, therefore, enjoy a wider degree of freedom of expression and recourse to exaggeration should not be seen as provocation.

10. Human rights and fundamental freedoms are universally recognised, in particular under the Universal Declaration of Human Rights and International Covenants of the United Nations. The application of these rights is not, however, universally coherent. The Assembly should fight against any lowering of these standards. The Assembly welcomes the United Nations Secretary-General's initiative on an alliance of civilisations which aims to mobilise concerted action at the institutional and civil society levels to overcome prejudice, misperceptions and polarisation. A true dialogue can only occur when there is genuine respect for and understanding of other cultures and societies.

Values such as respect for human rights, democracy, rule of law and accountability are the product of mankind's collec-

tive wisdom, conscience and progress. The task is to identify the roots of these values within different cultures.

11. Whenever it is necessary to balance human rights which are in conflict with each other in a particular case, national courts and national legislators have a margin of appreciation. In this regard, the European Court of Human Rights has held that, whereas there is little scope for restrictions on political speech or on the debate of questions of public interest, a wider margin of appreciation is generally available when regulating freedom of expression in relation to matters liable to offend intimate personal moral convictions or religion. What is likely to cause substantial offence to persons of a particular religious persuasion will vary significantly from time to time and from place to place.

12. The Assembly is of the opinion that freedom of expression as protected under Article 10 the European Convention on Human Rights should not be further restricted to meet increasing sensitivities of certain religious groups. At the same time, the Assembly emphasises that, hate speech against any religious group is not compatible with the fundamental rights and freedoms guaranteed by the Convention and the case law of the Court.

13. The Assembly calls on parliaments in member states to hold debates on freedom of expression and the respect for religious beliefs, and on members to report back to the Assembly about the results of these debates.

14. The Assembly encourages religious communities in Europe to discuss freedom of expression and respect for religious beliefs within their own community and to pursue a dialogue with other religious communities in order to develop a common understanding and a code of conduct for religious tolerance which is necessary in a democratic society.

15. The Assembly also invites media professionals and their professional organisations to discuss media ethics with regard to religious beliefs and sensitivities. The Assembly encourages the creation of press complaints bodies, media ombudspersons or other self-regulatory bodies, where such bodies do not yet exist, which should discuss possible remedies for offences to religious persuasions.

16. The Assembly encourages intercultural and interreligious dialogue based on universal human rights, involving – on the basis of equality and mutual respect – civil society, as well as the media, with a view to promoting tolerance, trust and mutual understanding which are vital for building coherent societies and strengthening international peace and security.

17. The Assembly encourages the Council of Europe bodies to work actively on the prevention of hate speech directed to different religious and ethnic groups.

18. The Assembly resolves to revert to this issue on the basis of a report on legislation relating to blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion, after taking stock of the different approaches in Europe, including the application of the European Convention on Human Rights, the reports and recommendations of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) and of the Venice Commission and the reports of the Council of Europe Commissioner for Human Rights.

1.1.3. JURISPRUDENCIA DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Organe d'origine: Cour (Grande Chambre)

Type de Document: Arrêt (au principal et satisfaction équitable)

Langue: FRANÇAIS; ANGLAIS

Intitulé de l'affaire: AFFAIRE FOLGERO AND OTHERS c. NORVEGE

Numéro de requête: 15472/02

Niveau d'importance: 1

Représenté Par: STAVRUM L.

Etat Défendeur: Norvège

Date d'introduction: 15/02/2002

Date de l'arrêt: 29/06/2007

Conclusion: Violation de P1-2; Non-lieu à examiner les art. 14+8+9+P1-2; Préjudice moral - constat de violation suffisant; Remboursement frais et dépens - procédure nationale; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Articles: 8; 9; 14+8+9+P1-2; 41; P1-2

Opinions Séparées: Oui

Jurisprudence de Strasbourg: Angelini c. Suède (déc.), no 1041/83, 51 DR (1983); Linguistique belge (au principal), arrêt du 23 juillet 1968, série A n° 6, pp. 31-32, § 4; Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A n° 48, pp. 16-18, §§ 36-37; Dahlab c. Suisse (déc.), n° 42393/98, CEDH 2001-V; Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 23, pp. 24-28, §§ 50 to 54; Öcalan c. Turquie [GC], n° 46221/99, § 135, CEDH 2005; Valsamis c. Grèce, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28

Mots Clés: «RESPECT DES CONVICTIONS RELIGIEUSES DES PARENTS» «RESPECT DES CONVICTIONS PHILOSOPHIQUES DES PARENTS»

Organe d'origine: Cour (Cinquième Section)

Type de Document: Arrêt (au principal)

Langue: ANGLAIS

Intitulé de l'affaire: AFFAIRE SVIATO-MYKHAILIVSKA PARAFIYA c. UKRAINE

Numéro de requête: 77703/01

Niveau d'importance: 2

Représenté Par: BUZADZHY K.

Etat Défendeur: Ukraine

Date d'introduction: 04/01/2001

Date de l'arrêt: 14/06/2007

Conclusion: Exceptions préliminaires rejetées; Violation de l'art. 9; Non-lieu à examiner l'art. 6-1; Partiellement irrecevable

Articles: 6-1; 9; 34; 35-1; 35-3; P1-1

Opinions Séparées: Non

Jurisprudence de Strasbourg: Al-Nashif c. Bulgarie, n° 50963/99, § 89, 20 juin 2002; Amann c. Suisse [GC], n° 27798/95, CEDH 2000-II, §§ 55 et 56; Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], n° 27417/95, § 72, CEDH 2000-VII; Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66; Groppera Radio AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A n° 173, p. 26, § 68; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], n° 30985/96, § 62 et § 78, CEDH 2000-XI; Kokkinakis c. Grèce, judgment cited above, pp. 17 et 18, §§ 31 et 33; Larissis et autres c. Grèce, arrêt du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 378, § 40; Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 47; Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, n° 45701/99, §§ 105, 106, 109, 118 et 123, CEDH 2001-XII; Partidul Comunistilor (Nepeceeristi) et Ungureanu c. Roumanie, n° 46626/99, § 49, CEDH 2005-I (extraits); Piryaniuk c. Ukraine, n° 75788/01, § 20, 19 avril 2005.

Mots Clés: «EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES» «INGERENCE-{ART 9}» «LIBERTE DE PENSEE» «LOCUS STANDI» «NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE-{ART 9}» «PREVISIBILITE-{ART 9}» «PREVUE PAR LA LOI-{ART 9}» «PROCEDURE CIVILE» «PROCES EQUITABLE» «PROTECTION DE L'ORDRE PUBLIC-{ART 9}» «PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI-{ART 9}» «REQUETE ABUSIVE» «SURETE PUBLIQUE-{ART 9}» VICTIME

Organe d'origine: Cour (Deuxième Section)

Type de Document: Arrêt (au principal et satisfaction équitable)

Langue: FRANÇAIS

Intitulé de l'affaire: AFFAIRE 97 MEMBRES DE LA CONGREGATION DES TEMOINS DE JEHOVAH DE GLDANI ET 4 AUTRES c. GEORGIE

Numéro de requête: 71156/01

Niveau d'importance: 1

Représenté Par: CARBONNEAU A.; TCHABACHVILI M.

Etat Défendeur: Géorgie

Date d'introduction: 29/06/2001

Date de l'arrêt: 03/05/2007

Conclusion: Non-violation de l'art. 3 à l'égard de certains requérants; Violation de l'art. 3 isolément et en combinaison avec l'art. 14, à l'égard de certains requérants dont six du chef des traitements infligés à leurs enfants; Violation de l'art. 9 isolément et en combinaison avec l'art. 14, à l'égard des 96 requérants identifiés; Aucune question distincte au regard de l'art. 13; Non-lieu à examiner les art. 10 et 11; Préjudice moral - réparation pécuniaire; Remboursement partiel frais et dépens

Articles: 3; 9; 10; 11; 14; 41

Opinions Séparées: Non

Droit en Cause: Constitution, articles 9 et 19; Code de procédure pénale, alors en vigueur; Code pénal, articles 71 § 1 a), 155 et 166

Jurisprudence de Strasbourg: A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 22; Abdulsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 60, 2 novembre 2004; Amy c. Belgique (déc.), no 11684/85, décision de la Commission du 5 octobre 1988; Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 111, CEDH 2002-IV; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 149 et §§ 202-203, CEDH 2004-II; Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102; Bati et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV (extraits); Berktaş c. Turquie, no 22493/93, § 165, 1 mars 2001; Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, § 37, CEDH 2000-X; Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 84, CEDH 2000-VII; Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79; Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 338, CEDH 2005; Davtian c. Géorgie, no 73241/01, § 37 et § 46, 27 juillet 2006; Donadze c. Géorgie

Sources Externes: Résolution 1257 (2001) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe; Conclusions et Recommandations du Comité de l'ONU contre la torture (2001); Rapport annuel mondial de Human Rights Watch (2002)

Mots Clés: DISCRIMINATION «JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS» «LIBERTE DE RELIGION» «MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION» «OBLIGATIONS POSITIVES» RELIGION «TRAITEMENT DEGRADANT» «TRAITEMENT INHUMAIN» VICTIME

Organe d'origine: Cour (Deuxième Section)

Type de Document: Arrêt (au principal et satisfaction équitable)

Langue: FRANÇAIS

Intitulé de l'affaire: AFFAIRE ULUSOY ET AUTRES c. TURQUIE

Numéro de requête: 34797/03

Niveau d'importance: 2

Représenté Par: KANAT L.

Etat Défendeur: Turquie

Date d'introduction: 17/09/2003

Date de l'arrêt: 03/05/2007

Conclusion: Non-lieu à examiner les art. 9, 11, 14 et 17; Dommage matériel - demande rejetée; Préjudice moral - réparation pécuniaire; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale et procédure de la Convention

Articles: 9; 10; 11; 14; 17; 29-3; 41

Opinions Séparées: Non

Droit en Cause: Article 17 de la loi n° 2911; Article 8 de la loi n° 3713; Article 11 de la loi n° 5442; Article 1 additionnel de la loi n° 2559

Jurisprudence de Strasbourg: Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178, p. 23, § 47; Bowman c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 33; Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285, pp. 16-17, § 35; Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 46; Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 43, CEDH 2003-III; Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49; Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133, § 27 et § 33; Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 60; Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, §§ 40 et 43; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 100, CEDH 2001-IX

Mots Clés: «DEFENSE DE L'ORDRE-{ART 10}» «DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES» DISCRIMINATION «GARANTIES CONTRE LES ABUS-{ART 10}» «LIBERTE D'EXPRESSION» «LIBERTE DE PENSÉE» «LIBERTE DE REUNION PACIFIQUE» «NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE-{ART 10}» «PREVUE PAR LA LOI-{ART 10}»

Organe d'origine: Cour (Cinquième Section)

Type de Document: Arrêt (au principal et satisfaction équitable)

Langue: ANGLAIS

Intitulé de l'affaire: AFFAIRE IVANOVA c. BULGARIE

Numéro de requête: 52435/99

Niveau d'importance: 2

Représenté Par: GROZEV, Y.

Etat Défendeur: Bulgarie

Date d'introduction: 27/05/1999

Date de l'arrêt: 12/04/2007

Conclusion: Violation de l'art. 9; Non-lieu à examiner l'art. 14; Dommage matériel - réparation pécuniaire; Préjudice moral - réparation pécuniaire; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Articles: 9; 14; 41

Opinions Séparées: Non

Jurisprudence de Strasbourg: Knudsen c. Norvège, n° 11045/84, Commission décision du 8 mars 1985, Décisions et rapports 42, pp. 247-58, at p. 258; Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 17, § 31; Kontinen c. Finlande, n° 24949/94, Commission décision du 3 décembre 1996, non publié; Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, n° 45701/99, § 134, CEDH 2001-XII; Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A n° 323, pp. 23 et 31, §§ 44 et 65

Mots Clés: DISCRIMINATION «INGERENCE-{ART 9}» «LIBERTE DE RELIGION» «NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE-{ART 9}» «PREVUE PAR LA LOI-{ART 9}»

Organe d'origine: Cour (Troisième Section)

Type de Document: Arrêt (au principal et satisfaction équitable)

Langue: FRANÇAIS

Intitulé de l'affaire: AFFAIRE KAVAKCI c. TURQUIE

Numéro de requête: 71907/01

Niveau d'importance: 2

Représenté Par: HINCKER L.; OZDEMIR S.

Etat Défendeur: Turquie

Date d'introduction: 28/05/2001

Date de l'arrêt: 05/04/2007

Conclusion: Violation de P1-3; Non-lieu à examiner les art. 6, 9 et 14; Dommage matériel - demande rejetée; Préjudice moral - constat de violation suffisant; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Articles: 6; 9; 14; P1-3; 41

Opinions Séparées: Non

Droit en Cause: Constitution, articles 68§4, 69 § 6, 69 § 8, 84 alors en vigueur; Constitution telle qu'amendée en 2001, articles 68§4, 69§6 à 69§9, 84; Loi n° 403 sur la nationalité, article 25

Jurisprudence de Strasbourg: Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, §§ 56-57 et 62, CEDH 2005-IX; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV; Lykourazos c. Grèce, no 33554/03, § 50 et § 52, CEDH 2006; Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, pp. 22-23, §§ 46-51 et 52; Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 63, CEDH 1999-I; Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II; Selim Sadak et autres c. Turquie, nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, §§ 33, 37 et 38, CEDH 2002-IV; Zdanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 102, 16 mars 2006

Mots Clés: DISCRIMINATION «LIBRE EXPRESSION DE L'OPINION DU PEUPLE» «MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION» «PROCES EQUITABLE» PROPORTIONALITE «SE PORTER CANDIDAT AUX ELECTIONS»

Organe d'origine: Cour (Première Section)

Type de Document: Arrêt (au principal et satisfaction équitable)

Langue: ANGLAIS

Intitulé de l'affaire: AFFAIRE EGLISE MOSCOVITE DE SCIENTOLOGIE c. RUSSIE

Numéro de requête: 18147/02

Niveau d'importance: 2

Représenté Par: HODKIN P.; KRYLOVA G.; KUZMICHEV M.

Etat Défendeur: Russie

Date d'introduction: 24/04/2002

Date de l'arrêt: 05/04/2007

Conclusion: Exception préliminaire rejetée (victime); Violation de l'art. 11+9; Non-lieu à examiner l'art. 14; Dommage matériel - demande rejetée; Préjudice moral - réparation pécuniaire; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Articles: 9; 10; 11; 14; 34; 41

Opinions Séparées: Non

Jurisprudence de Strasbourg: Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A n° 37, § 33; Assanidze c. Georgie [GC], n° 71503/01, § 202, CEDH 2004-II; Carmuirea Spirituala a Musulmanilor din Republica Moldova c. Moldova (déc.), n° 12282/02, 14 juin 2005; Chassagnou et autres c. France [GC], nos. 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 89, CEDH 1999-III; Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1981, série A n° 45, § 67; Fadeyeva c. Russie, n° 55723/00, § 142, CEDH 2005; Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n° 44158/98, §§ 52 et 94-95, 17 février 2004; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], n° 30985/96, § 62, CEDH 2000-XI; Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Mol-

dova, n° 45701/99, §§ 105, 106, 114, 118, 123 et 134, CEDH 2001-XII; Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, n° 46626/99, § 49, CEDH 2005-I (extraits); Refah Partisi (the Welfare Parti) et autres c. Turquie [GC], nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, §§ 86-89, CEDH 2003-II; Shofman c. Russie, n° 74826/0

Mots Clés: DISCRIMINATION «INGERENCE-{ART 11}» «INGERENCE-{ART 9}» «LIBERTE D'ASSOCIATION» «LIBERTE D'EXPRESSION» «LIBERTE DE RELIGION» «PREVUE PAR LA LOI-{ART 11}» «PREVUE PAR LA LOI-{ART 9}» VICTIME

Organe d'origine: Cour (Quatrième section)

Type de Document: Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)

Langue: ANGLAIS

Intitulé de l'affaire: AFFAIRE KOUZNETSOV c. UKRAINE

Numéro de requête: 39042/97

Niveau d'importance: 1

Représenté Par: N/A

Etat Défendeur: Ukraine

Date de l'arrêt: 29/04/2003

Conclusion: Non-violation de l'art. 3 pour ce qui est des agressions alléguées; Violation de l'art. 3 quant à l'absence d'enquête effective; Violation de l'art. 3 en ce qui concerne les conditions de détention; Violation de l'art. 8; Violation de l'art. 9; Préjudice moral - réparation pécuniaire; Remboursement partiel frais et dépens

Articles: 3; 8-1; 8-2; 9-1; 9-2; 41

Opinions Séparées: Yes

Jurisprudence de Strasbourg: Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1214, § 78; Christine Goodwin c. Royaume-Uni, n° 28957/95, 3 juillet 2002, § 124, to be published in CEDH 2002; Dougoz c. Grèce, n° 40907/98, § 46, CEDH 2001-II; Huvig c. France, judgments of 24 avril 1990, série A n° 176-B, p. 52, § 26; Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162; Kalashnikov c. Russie, n° 47095/99, §§ 95, 96 et 101, CEDH 2002-VI; Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86; Kruslin c. France, judgments of 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, § 27; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI; Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV; McCann c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 161; Nielsen et Johnson c. Norvège [GC], n° 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII; Peers c. Grèce, n° 28524/95, §§ 67-68 et 74, CEDH 2

Mots Clés: «INGERENCE-{ART 8}» «INGERENCE-{ART 9}» «MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION» «PREVISIBILITE-{ART 10}» «PREVUE PAR LA LOI-{ART 9}» «RESPECT DE LA CORRESPONDANCE» «RESPECT DE LA VIE FAMILIALE» «TRAITEMENT INHUMAIN»

Organe d'origine: Cour (Première Section)

Type de Document: Arrêt (au principal et satisfaction équitable)

Langue: ANGLAIS

Intitulé de l'affaire: AFFAIRE HAUT CONSEIL SPIRITUEL DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE c. BULGARIE

Numéro de requête: 39023/97

Niveau d'importance: 1

Représenté Par: MARGARITOVA-VUTCHKOVA S.

Etat Défendeur: Bulgarie

Date d'introduction: 09/09/1997

Date de l'arrêt: 16/12/2004

Applicabilité: Article 9 applicable

Conclusion: Violation de l'art. 9; Non-violation de l'art. 13; Non-lieu à examiner les art. 6 et 14; Préjudice moral - réparation pécuniaire; Remboursement partiel frais et dépens

Articles: 6; 9; 9-2; 13; 14; 41

Opinions Séparées: No

Jurisprudence de Strasbourg: Çakici c. Turquie [GC], n° 23657/94, § 112, CEDH 1999-IV;; Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], n° 27417/95, § 72 et § 84, CEDH 2000-VII;; Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV, § 35;; Connors c. Royaume-Uni, n° 66746/01, § 109, 27 mai 2004;; Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, n° 45701/99, § 123 et § 146, CEDH 2001-XII;; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], n° 30985/96, §§ 62, 78 et 86, CEDH 2000-XI;; Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p.18, § 33;; Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 151, CEDH 2000-XI;; Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], n° 23885/94, § 57, CEDH 1999-VIII;; Serif c. Grèce, n° 38178/97, §§ 49, 52 et 53, CEDH 1999-IX;; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos. 29221/95 et 29225/95, § 121, CEDH 2001-IX;; Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A n° 217, § 61;

Mots Clés: «INGERENCE-{ART 9}» «LIBERTE DE RELIGION» «NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE-{ART 9}» «PROTECTION DE L'ORDRE PUBLIC-{ART 9}» «PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI-{ART 9}» «RECOURS EFFECTIF»

Organe d'origine: Cour (Première Section)

Type de Document: Arrêt (au principal et satisfaction équitable)

Langue: ENGLISH

Intitulé de l'affaire: AFFAIRE AGGA c. GRECE (N° 3)

Numéro de requête: 32186/02

Niveau d'importance: 3

Représenté Par: EMIN S., avocat, Komotini

Etat Défendeur: Grèce

Date d'introduction: 06/08/2002

Date de l'arrêt: 13/07/2006

Conclusion: Violation de l'art. 9; Aucune question distincte au regard de l'art. 10; Dommage matériel - demande rejetée; Préjudice moral - constat de violation suffisant; Remboursement frais et dépens - procédure nationale; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Articles: 9-1; 9-2; 10; 41

Opinions Séparées: No

Jurisprudence de Strasbourg: Agga c. Grèce (n° 2), arrêt du 17 octobre 2002, nos. 50776/99 and 52912/99, §§ 33-44, 54, 55, 58, 61; Cumpăna and Mazare c. Roumanie [GC], n° 33348/96, § 133, CEDH 2004 XI; Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260 A, §§ 31, 33; Serif c. Grèce, n° 38178/97, § 39, CEDH 1999 IX; Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996 V, p. 1956, § 53

Mots Clés: CULTE ENSEIGNEMENT «LIBERTE D'EXPRESSION» «MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION» «NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE-{ART 9}» «PROTECTION DE L'ORDRE PUBLIC-{ART 9}»

I.2. BIBLIOGRAFÍA¹

1. ALIVIZATOS, Nicos C.: «Le droit constitutionnel européen impose-t-il l'état laïque?», en *The Constitutional Revision in Today's Europe = La Révision Constitutionnelle dans l'Europe d'Aujourd'hui*. London: Esperia, 2002; pp. 653-656.
2. ANTHONY, Gordon: «Public law, pluralism, and religion in Europe: accommodating the challenge of globalisation», en *European Review of Public Law*, v. 17, n° 1, Spring, 2005; pp. 47-73.
3. BUSTO SAIZ, José Ramón: «El diálogo interreligioso en la construcción de Europa», en Susana de Tomás Morales; Esther Vaquero Lafuente, y Javier Valle López (coords.): *El día de Europa : presente y futuro de la Unión Europea: actas de las I jornadas en conmemoración del día de Europa de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Madrid, 8 de mayo de 2002*. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2003; pp. 33-43.
4. CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago: *Libertad religiosa, simbología y laicidad del Estado*. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi, [2005]. (Monografías Aranzadi; 353).
5. CASSUSCELLI, Giuseppe y PAULY, Alexis (col.): «Le pays de la Méditerranée», en Salvatore Berlingò (dir.): *Code Européen Droit et Religions*. Milano: Giuffrè, 2001 Tomo I.
6. CELADOR ANGÓN, Óscar: «Notas para una interpretación sistemática del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea en materia de libertad de conciencia», en *Derechos y Libertades*, n° 12, enero-febrero, 2003; pp. 141-177.
7. —: «La religión en la escuela : el contexto español y europeo», en Dionisio Llamazares Fernández (dir.): *Libertad de Conciencia y Laicidad en las Instituciones y Servicios Públicos*. Madrid: Dykinson, 2005; pp. 301-337.
8. CLERGERIE, Jean-Louis: «La place de la religion dans la future Constitution européenne», en *Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Étranger*, n° 3, 2004; pp. 739-754.
9. CONTRERAS MAZARÍO, José María: «La protección de la libertad de conciencia y de las minorías religiosas en la Unión Europea: un proceso inacabado», en *Derechos y Libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas*, n° 11, enero-diciembre, 2002; pp. 155-222.
10. FERNÁNDEZ-CORONADO GONZÁLEZ, Ana (dir.): *El derecho de la libertad de conciencia en el marco de la Unión Europea : pluralismo y minorías*. Madrid: Colex, 2002.
11. FERNÁNDEZ LÓPEZ, María Fernanda y CALVO GALLEGO, Francisco Javier: «La Directiva 78/2000/CE y la prohibición de discriminación por razones ideológicas : una ampliación del marco material comunitario», en *Temas Laborales*, n° 59, (2001); pp. 125-163.
12. GARCÍA PARDO, David: *El sistema de acuerdos con las confesiones minoritarias en España e Italia*. Madrid: Boletín Oficial del Estado: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999. (Cuadernos y debates; 82).
13. GONOD, Pascale: «Religions et droit public : introduction générale», en *European Review of Public Law*, v. 17, n° 1, spring, 2005; pp. 29-46.
14. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Alejandro: «Las innovaciones de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea en materia de libertad religiosa», en: *Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense: Facultad de Derecho de Ourense*, 2002; pp. 271-288.
15. HERA, Alberto de la y MARTÍNEZ DE CODES, Rosa María, (coords.): *Proyección nacional e internacional de la libertad religiosa*. Madrid: Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, 2001.
16. IBÁN, Iván C.: «Concordatos en la Unión Europea : ¿una reliquia del pasado o un instrumento válido para el siglo XXI?», en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, v. XIX, 2003; pp. 17-77.
17. KIRCHHOF, Paul: «Braucht das Staats- und Europarrecht eine Regelung zu den Religionen?», en *Die Verrechtliche Religion: der Öffentlichkeitsstatus von Religionsgemeinschaften*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005; pp. 187-206.
18. LLAMAZARES CALZADILLA, María Cruz: «Símbolos religiosos y administración pública: el problema en las aulas de centros públicos docentes», en Dionisio Llamazares Fernández (dir): *Libertad de Conciencia y Laicidad en las Instituciones y Servicios Públicos*. Madrid: Dykinson, 2005; pp. 277-300.
19. MARANO, Venerando: «Unione Europea ed esperienza religiosa: problemi e tendenze alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea», en *Il Diritto Ecclesiastico*, 2001; pp. 862-904. parte I.
20. MARGIOTTA BROGLIO, Francesco: «Il fattore religioso nell'Unione Europea: continuità e nuovi problemi», en *Studi in Onore di Francesco Finocchiaro*. Padova: CEDAM, v. II, 2000; pp. 1251-1278.
21. MARTÍN DELGADO, Isaac y GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Alejandro: «The functions and legal status of religious denominations in the construction process of Europe», en *European Review of Public Law*, v. 17, n° 1, Spring, 2005; pp. 623-689.
22. MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro: «La laicidad positiva y su reflejo en los Estados miembros de la Unión europea», en *El Derecho Eclesiástico a las Puertas del Siglo XXI: libro homenaje al profesor Juan Goti Ordeñana*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2006; pp. 265-298.
23. —: «Patria potestad y libertad religiosa del menor en la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos», en *Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado (9º. 2000. San Sebastián)*. *Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el derecho comparado: actas del IX Congreso internacional de derecho eclesiástico del Estado: [San Sebastián, 1 al 3 de junio del año 2000]*. [Bilbao]: Universidad del País Vasco, Servicio Editorial = Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitaipen Zerbitzua, [2001]; pp. 585-602.
24. MARTÍNEZ DE CODES, Rosa María: «La religión y la nueva Constitución para Europa», en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, v. 21, 2005; pp. 39-47.
25. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier: «Derecho de familia y libertad de conciencia en el Convenio Europeo de Derechos Humanos», en *Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado (9º. 2000. San Sebastián)*. *Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión Europea y el derecho comparado : actas del IX Congreso internacional de derecho eclesiástico del Estado: [San Sebastián, 1 al 3 de junio del año 2000]*. [Bilbao]: Universidad del País Vasco, Servicio Editorial = Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitaipen Zerbitzua, [2001]; pp. 143-162.
26. —, (ed.): *Estado y religión en la Constitución española y en la Constitución europea: actas del Seminario*

¹ Esta selección bibliográfica incluye referencias desde 1999.

- Internacional Complutense celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid 14 de mayo de 2004*. Granada: Comares, 2006. (Religión, derecho y sociedad).
27. MEHDI, Rostane: «L'Union Européenne et le fait religieux», en *Revue Française de Droit Constitutionnel*, n° 54, avril-juin, 2003; pp. 227-248.
28. MELLONI, Alberto: «L'Europa delle religioni», en *Il Mulino: Rivista Bimestrale di Cultura e di Politica*, n° 404 (n. 6/2002), novembre-dicembre, 2002; pp. 1057-1066.
29. MESSNER, Francis: «Estado y religión», en *Vanguardia Dossier*, n° 6, abr.-jun., 2003; pp. 86-88.
30. MORENO BOTELLA, Gloria: «El factor religioso en la Constitución Europea», en *Revista Jurídica : Universidad Autónoma de Madrid*, n° 13, 2005; pp. 219-233.
31. MUCKEL, Stefan: «Die Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgemeinschaften nach der Vertrag über eine Verfassung für Europa», en *Die Öffentliche Verwaltung*, n° 5, 2005; pp. 191-200.
32. NIETO NÚÑEZ, Silverio y CORRAL SALVADOR, Carlos: «La garantía de la enseñanza de la religión en los estados de la Unión Europea y candidatos a ella», en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, v. 19, 2003; pp. 305-343.
33. PALOMINO, Rafael: *Religión y derecho comparado*. Madrid: Iustel, 2007.
34. PARISI, Marco: *L'Islam e i paesi europei : problemi giuridici e di legalità costituzionale*. Salerno: Edisud, [2000]. (Studi e ricerche di diritto ecclesastico).
35. RELAÑO PASTOR, Eugenia: «La libertad religiosa y de conciencia en la Unión Europea: la Carta de los Derechos Fundamentales y la futura Constitución Europea», en *Revista Española de Derecho Europeo*, n° 12, oct.-dic., (2004); pp. 563-594.
36. REYES, Román (dir.): *Europa, siglo XXI: secularización y estados laicos*. [Madrid] : Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, 2006.
37. ROBBERS, Gerhard (ed.): *State and church in the European Union*. Baden-Baden: Nomos, 2005.
38. ROCA, María J.: *Derechos fundamentales y autonomía de las iglesias*. Madrid: Dykinson, [2005].
39. STANCATI, Paolo: «Il diritto fondamentale comunitario alla libera manifestazione del pensiero: profili critici e ricostruttivi (Parte I)», en *Politica del Diritto*, n° 2, giugno, 2005; pp. 171-242.
40. VENIZELOS, Evangelos: «The European Constitution and the religious phenomenon», en *European Review of Public Law*, v. 17, n° 1, spring, 2005; pp. 691-706.
41. YATAGANAS, Xénophon: «Le droit communautaire face aux religions», en *European Review of Public Law*, v. 17, n° 1, spring, 2005; pp. 707-717.
42. ZABALZA BAS, Ignacio: «Comentario acerca de los trabajos de la comisión parlamentaria alemana sobre las denominadas sectas y psicogrupos», en *Laicidad y Libertades: Escritos Jurídicos*, n° 1, diciembre, 2001; pp. 445-453.

I.3. DIRECCIONES WEB

Unión Europea

www. <http://europa.eu.int/>

Consejo de Europa

<http://www.coe.int>

Tribunal de Derechos Humanos

<http://www.echr.coe.int>